

A MODO DE EPÍLOGO: PODER LOCAL Y PARAMILITARISMO O LA ELIMINACIÓN DE LA POLÍTICA ENTRE LOS CAMPEBINOS^{1*}

JOSÉ ANTONIO FIGUEROA
Antropólogo

A partir de los años setenta en la Costa Atlántica han convergido dos fenómenos: el sistemático aniquilamiento de la población campesina politizada y el afianzamiento del poder local a través del paramilitarismo que ha impulsado el desalojo de toda la población campesina no afecha a sus intereses. En los departamentos del Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y la Guajira de donde las elites liberales irrigaron al plano nacional las imágenes del pacifismo y del pacto interclasista se fue convirtiendo en uno de los más macabros escenarios de experimentación en contra de las poblaciones campesinas a través de acciones punitivas encaminadas a garantizar la vinculación de la producción de ganado, algodón y coca al mercado internacional.

¹ Texto tomado con la autorización escrita del autor, de su libro Realismo mágico, vallenato y violencia política en el Caribe colombiano, publicado en 2009, en Bogotá, por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pp. 221-225.



Ilustración: Bestias inhumanas - indolencia



El paramilitarismo se ha consolidado en la costa a partir de una confluencia de intereses entre las elites latifundistas regionales, el narcotráfico, los sectores políticos del liberalismo y el conservadurismo tradicional y las fuerzas de seguridad del estado. En los últimos años se ha ido revelando cómo los paramilitares han logrado establecer un sistema de tributación paralelo al del estado, han creado un sistema financiero propio, controlan los mercados, las tiendas de abarrotes, las casas de prostitución, los casinos, las universidades locales y la política de los distintos departamentos de la costa. De acuerdo con denuncias que aparecieron en la revista liberal independiente *Semana* del 25 de noviembre del 2006, en las elecciones del 2002 los paramilitares cometieron un fraude electoral de tal magnitud que permitió su dominio total de la representación política en los departamentos, ciudades y municipios de la costa Atlántica y, además,

garantizaron el triunfo en primera vuelta del actual presidente de la República, Álvaro Uribe.

Los paramilitares de la costa se han encargado de imponer en sus acciones punitivas contra los campesinos un toque nacional-tropicalista: del 15 al 19 de febrero del año 2000 fueron torturados y asesinados casi cien campesinos en la cantada zona de los Montes de María. Es inenarrable el terror al que fueron sometidos los campesinos de los pueblos de Córdoba, Canutal, Canutalito, Flor del Monte y El Salado, en los límites entre los departamentos de Bolívar y Sucre.

De acuerdo con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en el espectáculo montado por el paramilitarismo sólo había dos opciones posibles para los campesinos: o ser testigos forzados de la danza de la muerte o ser las víctimas tomadas al azar. Frente a la iglesia, a la mayo-

ría de las víctimas las degollaron, a otras las ahorcaron o fueron muertas a golpes, algunas mujeres fueron sometidas a violencia sexual, una niña fue obligada a comer cactus mientras paramilitares y pobladores veían cómo agonizaba y moría de sed. Se jugaba al treinta: contando de uno en uno al que le tocara el fatídico número era asesinado a golpe de destornilladores en la cabeza. El espectáculo fue acompañado de lo que sería común en las actividades de los paramilitares en la costa: una interminable parranda vallenata, con música de acordeón, con una borrachera generalizada entre los paramilitares y con comida a la que eran obligadas a cocinar mujeres de los poblados, mientras sobrevolaban los helicópteros del Ejército Nacional. El resultado según el informe: más de 100 muertos, seiscientas familias desplazadas a municipios vecinos o a ciudades como Cartagena, Sincelejo y Barranquilla y la expansión de la propiedad la-

tifundista en manos de los paramilitares, lo que confirma el proceso de contrarreforma agraria que ha venido acompañando la violencia paramilitar en Colombia.

Al amenizar las masacres con las parrandas vallenatas, los actores rurales recuerdan que está en juego un orden simbólico regional que se acata o se muere. La parranda vallenata en medio de la muerte tiene un significado específico: los campesinos tienen que aceptar gustosamente el orden moral impuesto por el proyecto regionalista y abandonar la política.

La política, como la entienden tanto los jefes paramilitares como los intelectuales del regionalismo liberal, es un asunto de mayores, de una minoría que la entiende y la ejecuta. Dicho en lenguaje local, la política es para los pesados. En la década de 1940 llegó al departamento del Cesar, Alberto Marulanda Grillo, proveniente de Santander. A través de métodos fraudulentos y aprovechando los vacíos en la tradición de titulación fue apropiándose de amplios terrenos hasta llegar a alegar que sus posesiones superaban las 30.000 hectáreas. Su dominio cubre una importante zona campesina del Cesar en la que están los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque. Hay documentación existente

que certifica conflictos entre Marulanda Grillo y los campesinos desde los años cuarenta, que vuelven a surgir con fuerza en la década de los setenta, cuando aparece y se consolida la presencia regional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).

Una de las versiones de los conflictos con Marulanda Grillo hace mención a un grupo de campesinos que había tenido problemas con el Ejército venezolano desde 1970 en la zona fronteriza donde se encontraban trabajando desde los años cuarenta. Los campesinos pretendieron que el Ejército y el gobierno colombiano les ayudara a clarificar de quién eran las tierras que habían estado trabajando, ya que si eran tierras de Venezuela consideraban que deberían conseguir un nuevo asentamiento y recibir indemnización por casi tres décadas de trabajo. No encontraron respuesta ni del Ejército ni del gobierno, y, por el contrario, fueron desalojados en 1973, ante lo cual acudieron a la ANUC.

Organizados como comité de usuarios se toman un predio montañoso que luego Marulanda Grillo alegaría que le pertenecía. Este, con el apoyo del Ejército y de la Policía, desaloja a los campesinos, lo que generó una serie de movilizaciones cívicas en los departamentos de

Cesar y La Guajira. Mientras tanto Marulanda Grillo declara una batalla frontal contra el movimiento campesino. Luego de su muerte, sus hijos Francisco y Carlos Arturo Marulanda Ramírez consolidan su papel en la política regional a través del voto obligado de todos los campesinos que están dentro y fuera de sus propiedades. A su vez, los nexos con la política nacional se consolidan hasta el punto de que Carlos Arturo Marulanda sería ministro de Desarrollo en 1986 y embajador ante los Países Bajos durante la administración de Ernesto Samper (1994-1998).

Por su parte la ANUC, a pesar de sus altibajos, mantuvo incentivando a los sectores campesinos regionales a resolver los problemas del acceso a tierras y así adelantaron los trámites para la legalización de una posesión de unas 2.000 hectáreas de tierras que tenían desde 1986 unas 450 familias. En 1989, siendo ministro de Desarrollo Marulanda Ramírez, este intentó vender al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) 2.000 hectáreas ocupadas por los campesinos que él declaraba como propias. Dado que al INCORA le parecía excesivo el precio estipulado por el ministro, decidió esclarecer la propiedad, y en abril de 1994 se catalogaron como baldías distintas zonas re-

clamadas por Marulanda y se legitimaba la posesión campesina. Sin embargo, Marulanda, con el apoyo de fuerzas paramilitares, ya había iniciado el desplazamiento forzado de los campesinos a través de una campaña de exterminio que apuntaba especialmente a los dirigentes de la ANUC.

Diversos testimonios muestran que Marulanda negoció tierras con el narcotraficante y contrabandista de esmeraldas Víctor Carranza, quien ayudó a organizar una de las acciones paramilitares más prolongadas y efectivas en el largo conflicto colombiano. Se dio incluso el caso de uno de los funcionarios del INCO-RA, quien había llegado a medir las tierras que deberían ser entregadas a los campesinos, a quien, como escarnio, le fue quitada la piel de la espalda dentro de la hacienda Bellacruz de los Marulanda. Los muertos por este caso son centenares y el impacto internacional que produjo fue tan grande que Marulanda tuvo que dejar su cargo de Embajador ante los Países Bajos y, en 1999, fue extraditado desde España a Colombia. Sin embargo, al llegar a Colombia fue sobreesido de los cargos, en noviembre del 2002, en los inicios de la presidencia de Álvaro Uribe, en uno de

los primeros gestos de rendición del país ante el paramilitarismo.

Después de uno de los más largos y engorrosos procesos de desplazamiento, algunos de los sobrevivientes de las masacres de la hacienda Bellacruz fueron relocalizados en una finca en el departamento del Tolima, al interior del país. La presencia de estos campesinos motivó a la guionista ibaguereña Alexandra Cardona Restrepo a escribir un reportaje “El amargo sabor de la Miel”, donde describe la odisea de ese desplazamiento y su apenas frágil reubicación en el campamento de la Miel. En una nota periodística sobre su reportaje le preguntaron a la guionista qué le había impactado al llegar a la Miel y dijo:

¡Uy no! Eso es demasiado, cuando tú llegas al Tolima y te encuentras en el centro del país una finca con una tienda, un pueblito costeño [...] es como si de un momento a otro hubieras llegado a Ciénaga pero resulta que estás en Ibagué, uno siente algo [...] pues yo no lo podía ver como algo muy curioso, es dramático, claro que ellos conservan, mantienen lo

único que les dejaron que es su cultura, pero es verdaderamente dramático. (http://www.eskpe.com/secc_eskpe/libr_eskpeunpasdondetodooocurre)

En su respuesta, Cardona deja traslucir la ambigüedad del siempre equívoco plano de la cultura. Campesinos que habían luchado sistemáticamente por tener una inclusión en el orden nacional como sujetos de derechos económicos y políticos terminan desplazados a otras geografías de la nación. Exiliados dentro de la propia nación, impactan a quienes los visitan, por su exotismo, y muestran también la persistencia de la cultura como rótulo de clasificación. La gran paradoja del testimonio de la guionista radica en su admiración por lo más visible y lo que menos motivó el desplazamiento de los campesinos. Estos desplazados, que encarnan una larga tradición de lucha por la inclusión de los campesinos costeños como sujetos de derechos políticos y económicos, sólo pudieron ser narrados en el testimonio por lo que menos reclamaban: su cultura. ■